



Proceso	Ejecutivo
Demandante	Banco de Occidente S.A.
Demandado	Unión Mutua S.A. y Luis José Botero Salazar
Radicados	05001 34 03 002 2019 00025 01
Procedencia	Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Asunto	Auto No. 042
Decisión	Confirma
Tema	Desistimiento tácito
	<p>En lo relevante, entonces, como lo señala el evento previsto en el numeral 2º del artículo 317 del C. General del Proceso y la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil: (i) El desistimiento tácito tiene aplicación aunque en ejecutivo se haya proferido sentencia o auto que orden cesar la ejecución; (ii) El plazo previsto en el numeral es de dos años contado desde la última actuación relevante; (iii) En fase de ejecución esas actuaciones son las necesarias para obtener el pago de la obligación, o lograr la cautela de bienes o derechos embargables del deudor con la finalidad de subastarlos para satisfacer el crédito perseguido.</p> <p>(i) Equivocado está el <i>a quo</i> cuando señaló que existe una acumulación de procesos, que “<i>consiste en reunir, o como algunos jurisconsultos dicen, en fusionar varios procesos en uno solo</i>” (Eduardo Pallares, <i>Derecho Procesal Civil, op. cit., pág.130</i>), verdad se está en presencia de acumulación de demandas que se tramita conforme al artículo 463 Ib.</p> <p>(ii) Lo anterior significa que, para los efectos del desistimiento tácito, aunque por disposición de la norma citada el trámite de cada demanda se hace en cuaderno separado, tal como se dispone para la primera, en realidad no hay lugar a asignar radicación diferente. Recuerda la Sala que esa costumbre se originó en este Distrito a instancia de la</p>

	<p>Sala Administrativa Seccional para efectos de la calificación de servicios de los jueces, creando confusión, pero se trata según el código del rito de un único proceso con demandas tramitadas en cuadernos diferentes.</p> <p>(iii) En consecuencia, la solicitud de embargo de acciones que los demandados tienen en Deceval S.A. formulada por el Banco de Occidente, resuelta positivamente mediante providencia del 8 de noviembre de 2022, irradia sus efectos al cuaderno contentivo del trámite que se ha venido dando a la demanda principal, iterando que no se trata de procesos diferentes.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRIBUNAL SUPERIOR

2023-038

SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del codemandado Luis José Botero Salazar contra el auto del 9 de marzo pasado proferido por el juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín en el proceso ejecutivo adelantado por el Banco de Occidente S.A. en su contra y de la sociedad Unión Mutua S.A., mediante el cual negó la solicitud de terminación del proceso por desistimiento tácito.

I. LO ACTUADO

1. En el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín se adelanta proceso ejecutivo instaurado por el Banco de Occidente S.A. en contra de Luis José Botero

Salazar y la sociedad Unión Mutua S.A., Rdo. 05001 31 03010 2011 00629 00. (C-6, 02- Ejecución)

2. Banco de Occidente acumuló nueva en contra de Luis José Botero Salazar y la sociedad Unión Mutua S.A. sin embargo se le asignó, Rdo. 05001 34 03 002 2019 00025 00. Tramitada esta nueva demanda, por auto del 27 de mayo de 2021 se aprobó la liquidación de crédito. (Archivo 1, folio 84)

3. El 9 de febrero de 2023, el codemandado Botero Salazar solicitó, mediante memorial en el que referenció con el Rdo. 05001 31 03010 2011 00629 00, la terminación por desistimiento tácito indicando que la última actuación tuvo lugar el 23 de octubre de 2019 cuando se decretó la concurrencia de embargos con la DIAN, trayendo como argumento de autoridad providencias de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, concluyendo que por más de dos años la parte actora no ha hecho ninguna gestión tendiente a definir la presente controversia, razón por la cual procedía dicha solicitud. (Archivo 1, C-6, 02 Ejecución)

4. Mediante providencia del 9 de marzo pasado, se negó la terminación del proceso por desistimiento tácito, dado que la última actuación dentro del mismo databa del 18 de enero de la presente anualidad 2023, por lo que no se cumplía con el término que se estipula el literal b del numeral segundo del artículo 317 del C. General del Proceso, para los procesos donde se ha ordenado seguir adelante la ejecución. (Archivo 2, C-6, 02 Ejecución)

3. En forma oportuna la mandataria judicial de la parte demandada, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, alegando que la providencia del 18 de enero corresponde a respuesta a un derecho de petición formulado por Hugo Alfonso Atencia Villareal, quien no es parte en el proceso, a lo que agregó que el mismo juzgado afirmó que los derechos de petición no son el vehículo idóneo para darle marcha al proceso. Luego, como las últimas actuaciones no buscan el pago de las obligaciones ni están encaminadas a perfeccionar medidas cautelares, procede la terminación del proceso por desistimiento tácito. (Archivo 3, C-6, 02 Ejecución)

5. Oportunamente la parte actora describió el traslado del recurso indicado que, no es posible aplicar lo consagrado en el artículo 317 del C. General del Proceso, puesto se evidencian varias actuaciones, no solo de parte sino de oficio, tales como solicitud de embargo del 24 de enero de 2022, y auto del 17 de noviembre del mismo año, mediante el cual se decretó el embargo de las acciones que poseen los demandados en la empresa DECEVAL S.A., oficio que la secretaria del Juzgado remitió el mismo día. (Archivo 5, C-6, 02 Ejecución)

6. La impugnación horizontal fue resuelta de manera desfavorable, indicando el a quo que:

“...Conforme a lo anterior, se evidencia que, dentro del expediente 05001 31 03010 2011 00629 00, después de la providencia del 23 de octubre de 2019, existen más actuaciones, que datan del 3 de noviembre del 2020, mediante la cual se ordenó oficiar a la DIAN y se le expidió certificación del proceso (cfr. FI 182 C02), del 20 de

septiembre de 2022, en la cual se allegó memorial del Juzgado Catorce Civil del Circuito de Oralidad, indicando el levantamiento del embargo de los remanentes del demandado LUIS JOSE BOTERO SALAZAR (archivos digitales 01 y 02, C07MedidasCautelares, 02Ejecucion) y del 18 de enero de 2023 mediante la cual se dio respuesta a derecho de petición (archivo digital 07, C07MedidasCautelares, 02Ejecucion), mismas que dados los argumentos de la parte recurrente no impulsan el proceso; así las cosas, si para la apoderada VOLKMAN SIERRA, no son suficientes las anteriores actuaciones, para que no se decrete la terminación por desistimiento tácito, se le advierte que, en el proceso acumulado con radicado 05001 34 03 002 2019 00025 00, la última actuación, es del 8 de noviembre de 2022 , la cual se notificó por estados del 9 de noviembre

de 2022, mediante la cual se decretó el embargo de las acciones a que tienen derechos los demandados UNION MUTUA S.A. y JOSE LUIS BOTERO SALAZAR en la empresa DECEVAL S.A, decisión que claramente impulsa el proceso, puesto que está orientada al perfeccionamiento de una medida cautelar y la cual se debe tener en cuenta en el proceso 05001 31 03 010 2011 00629 00, considerando que la acumulación, *“consiste en reunir, o como algunos jurisconsultos dicen, en fusionar varios procesos en uno solo”* (Eduardo Pallares, *Derecho Procesal Civil, op. cit., pág.130*).

“En consecuencia, el expediente no ha permanecido inactivo por más de dos años, y por ende no se configuran los parámetros establecidos por el artículo 317 del Código General del Proceso, pues como se desprende del proceso, la última actuación que impulsa a todos los procesos acumulados data del 08 de noviembre de 2022, notificada por estados del 09 de noviembre de 2022. (Archivo 8, C-6, 02 Ejecución)

Concedida la impugnación vertical, el expediente fue remitido a la Corporación, la que decide previas las siguientes

II. CONSIDERACIONES

1. En sentencia STC1216 de 2022, en asunto de similares contornos la Sala de Casación Civil, actuando como juez constitucional y el que se hizo petición con el fin de suspender el

término previsto en el numeral 2º del artículo 317 del C. General del Proceso, señaló:

“Se resalta, esta Sala estableció la aplicación del canon normativo en cita, determinando que sólo las actuaciones **relevantes** en el proceso pueden dar lugar la «*interrupción*» de los lapsos previstos en el mismo. Justamente, en la sentencia STC11191 de 9 de diciembre de 2020, para unificar las reglas jurisprudenciales de interpretación de la referida norma, sobre los procesos ejecutivos, se señaló:

«[D]ado que el desistimiento tácito consagrado en el artículo 317 del Código General del Proceso, busca solucionar la parálisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, la «actuación» que conforme al literal c) de dicho precepto «interrumpe» los términos para [que] se «decrete su terminación anticipada», es aquella que lo conduzca a «definir la controversia» o a poner en marcha los «procedimientos» necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer”.

“En suma, la «actuación» debe ser apta y apropiada y para «impulsar el proceso» hacia su finalidad, por lo que, «[s]imples solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derechos de petición intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi» carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo «ponen en marcha» (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020)”.

“Ahora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que además que allí se afirma que el «literal c» aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jurídica. No obstante, dado que prevén hipótesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cuál es la «actuación eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento”.

“Como en el numeral 1º lo que evita la «parálisis del proceso» es que «la parte cumpla con la carga» para la cual fue requerido, solo «interrumpirá» el término aquel acto que sea «idóneo y apropiado» para satisfacer lo pedido. De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el término de treinta (30) días, solo la «actuación» que cumpla ese cometido podrá afectar el cómputo del término”.

“En el supuesto de que el expediente «permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación (...) en primera o única instancia», tendrá dicha connotación aquella «actuación» que cumpla en el «proceso la función de impulsarlo», teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo”.

“Así, el impulsor de un declarativo cuyo expediente ha estado en la «secretaría del juzgado» por un (1) año sin emplazar a uno de los herederos del extremo demandado, podrá afectar el conteo de la anualidad con el «emplazamiento» exigido para integrar el contradictorio”.

“Si se trata de un coercitivo con «sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución», la «actuación» que valdrá será entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las «liquidaciones de costas y de crédito», sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligación cobrada”.

“Lo dicho, claro está, sin perjuicio de lo dispuesto por la Corte Constitucional (sentencia C-1194/2008), en cuanto a que el «desistimiento tácito» no se aplicará, cuando las partes «por razones de fuerza mayor, están imposibilitadas para cumplir sus deberes procesales con la debida diligencia (...)» (subrayas propias).

Por tanto, no todo escrito interrumpe el término del desistimiento tácito; así, para los procesos ejecutivos en los que exista sentencia o auto de seguir adelante con la ejecución, la suspensión, según lo advirtió la Sala en pasada oportunidad, *«se logra únicamente con actuaciones tendientes a la obtención del pago de la obligación o actos encaminados a lograr la cautela de bienes o derechos embargables del deudor, a fin de rematarlos y satisfacer el crédito perseguido»* (CSJ, STC4206-2021) ...”

2. En lo relevante, entonces, como lo señala el evento previsto en el numeral 2º del artículo 317 del C. General del Proceso y la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil: **(i)** El desistimiento tácito tiene aplicación aunque en ejecutivo se haya proferido sentencia o auto que orden cesar la ejecución; **(ii)** El plazo previsto en el numeral es de dos años contado desde la última actuación relevante; **(iii)** En fase de ejecución esas actuaciones son las necesarias para obtener el pago de la obligación, o lograr la cautela de bienes o derechos embargables del deudor con la finalidad de subastarlos para satisfacer el crédito perseguido.

3. En el caso concreto se tienen como relevante los siguientes hechos:

(i) Equivocado está el *a quo* cuando señaló que existe una acumulación de procesos, que “*consiste en reunir, o como algunos jurisconsultos dicen, en fusionar varios procesos en uno solo*” (Eduardo Pallares, *Derecho Procesal Civil, op. cit., pág.130*), verdad se está en presencia de acumulación de demandas que se tramita conforme al artículo 463 Ib.

(ii) Lo anterior significa que, para los efectos del desistimiento tácito, aunque por disposición de la norma citada el trámite de cada demanda se hace en cuaderno separado, tal como se dispone para la primera, en realidad no hay lugar a asignar radicación diferente.

Recuerda la Sala que esa costumbre se originó en este Distrito a instancia de la Sala Administrativa Seccional para efectos de la calificación de servicios de los jueces, creando confusión, pero se trata según el código del rito de un único proceso con demandas tramitadas en cuadernos diferentes.

(iii) En consecuencia, la solicitud de embargo de acciones que los demandados tienen en Deceval S.A. formulada por el Banco de Occidente, resuelta positivamente mediante providencia del 8 de noviembre de 2022, irradia sus efectos al cuaderno contentivo del trámite que se ha venido dando a la demanda principal, iterando que no se trata de procesos diferentes.

No sobra señalar que el mismo legislador ha previsto que si presentadas las nuevas demandas aún no se ha proferido sentencia, se dictará una sola en la que se dispondrá que todos los créditos se pagaran con el producto del remate de los bienes

embargados de acuerdo a la prelación establecida en la ley sustancial.

(iii) En consecuencia, contrario a lo afirmado por el recurrente en la petición del 9 de febrero del presente año, la última actuación no es la del 23 de octubre de 2019.

Corolario de lo expuesto procede la confirmación del auto recurrido.

III. DECISION

En mérito de lo expuesto el **Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión, CONFIRMA** el auto apelado de fecha y naturaleza indicada en la parte motiva de esta providencia. Sin costas por no haberse causado.

NOTIFIQUESE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado

Firmado Por:
Juan Carlos Sosa Londono
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7f1b1065493daaaa7fc53c3e052cf5268e4de7a9ef86cc0e4c0bb05170b67ebd**

Documento generado en 23/06/2023 02:28:19 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>